Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a **tres de abril de dos mil veinticuatro**.

**Visto** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **02459/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXXX XXXXXXXXX XXXXXX,** en lo sucesivo **la parte** **Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud por parte del **Ayuntamiento de Valle de Bravo,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **veintiuno de abril de** **dos mil veintitrés,** **la parte** **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número **00082/VABRAVO/IP/2023,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“solicito las certificaciones que exige la Ley Orgánica en sus artículos artículos 15, 32, 81 Bis, 85 Sexies, 92, 96, 96 Bis, 96 Quintus, 96 Septies, 96 Nonies, 96 Undecies, 96 Terdecies, 96 Quindecies, 113, 123 Bis, 124 Quater y 147 I” (Sic)*

**Modalidad de Entrega:** a través **de SAIMEX**

**2. Respuesta.** El **cuatro de mayo de dos mil veintitrés**, el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se envía adjunta la presente documentación, la cual fue turnada a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Valle de Bravo. Derivado de la similitud de una solicitud anterior se adjunta el Acta de Sesión Celebrada por el Comité de Transparencia donde se Confirma la Clasificación de la Información como Confidencial, al contener datos personales.*

*ATENTAMENTE*

*M.A. KARLA MARYSOL GARCIA DELGADO” (Sic)*

**Archivos adjuntos:**

***“9extra.pdf”:*** Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de Transparencia del Ayuntamiento de Valle de Bravo, mediante la cual se aprueba la propuesta de clasificación de información como confidencial de la solicitud 00083/VABRAVO/IP/2023, la cual no guarda relación con la solicitud de información del recurso de revisión que nos ocupa.

***“82 admonT.pdf”:*** Oficio DA/0406/MAYO/2023, suscrito por el Director de Administración, quien señala que conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, agrega las certificaciones de la Dirección de Bienestar, Contraloría, Mejora Regulatoria, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Asimismo, refiere que actualmente no cuenta con una Dirección de Ecología, pero si con una Coordinación que se encuentra dentro de la Dirección de Seguridad Pública, no se cuenta con una Dirección de Desarrollo Social pero el área equivalente es la Dirección de Bienestar, así también la Dirección de Obras Públicas se encuentra fusionada con la Dirección de Desarrollo Urbano, cabe mencionar también que las certificaciones de las diferentes áreas que se solicitan se encuentran en proceso conforme al artículo 32 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **cuatro de mayo de dos mil veintitrés,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**a) Acto impugnado:**

*“la respuesta” (Sic)*

**b) Razones o motivos de inconformidad**:

*“no entregan todo, no justifican ni fundamentan el porque no se entregan las demas certifiaciones solicitadas, no dan acuerdo de inexistencia, quitan las fotos de las certifiaciones, todo mal con esta unidad de transparencia.” (Sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **diez de mayo de dos mil veintitrés,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte que durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** remitió el **diecinueve de mayo de dos mil veintitrés**, los siguientes archivos electrónicos:

***“82AdmonRR.pdf”:*** Oficio DA/0441/MAYO/2023, por el cual, el Director de Administración señala que entregó certificaciones que únicamente se encuentran en los expedientes de servidores públicos, precisando que conforme a los artículos citados por la parte Recurrente, se hicieron entrega de los certificados con los que cuenta.

***“82RR.pdf”:*** Oficio UIPPE/007/MAYO/2023, signado por el Titular de la UIPPE, quien señala que de acuerdo al artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el requisito de la certificación de competencia laboral deberá acreditarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en la que inicie funciones, por lo que teniendo en cuenta que inició funciones el 21 de diciembre de 2022, aún no se puede proporcionar dicha documentación.

Oficio DDE/260/MAYO/2023, signado por la Directora de Desarrollo Económico, quien señaló que de acuerdo al artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el requisito de la certificación de competencia laboral deberá acreditarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en la que inicie funciones, por lo que teniendo en cuenta que inició funciones el 19 de abril de 2023, aún no se puede proporcionar dicha documentación.

***“13Extra86.pdf”:*** Acta de la Treceava Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de Transparencia de Valle de Bravo por el que se aprueba la propuesta de clasificación de la información como confidencial para dar sustento a las versiones públicas de las certificaciones del Recurso de Revisión 02459/INFOEM/IP/RR/2023.

***“82-areas1T.pdf“:*** Versión pública de las certificaciones de competencia laboral de la Titular de la Dirección del Bienestar, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Diploma expedido a favor de la Titular de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria.

***“82-areasT.pdf “:*** Documento de dieciséis fojas en el que se aprecian diversas certificaciones, sin embargo, no se puso a la vista de **la parte Recurrente** en virtud de que en la página 9 se advirtió un número telefónico del que no se tiene certeza si es un número telefónico oficial.

***“82 Turismo RR.pdf”:*** Oficio DT/162/MAYOL/2023, suscrito por el Director de Turismo, Cultura y Asuntos Internacionales, quien manifiesta que realizó la reevaluación de la certificación de competencia laboral en materia de turismo el 11 de mayo de 2023, determinándole como fecha de examen final el 24 de mayo de 2023.

***“RR82- otras.pdf”:*** Oficio signado por el Coordinador Municipal, quien remite la certificación de competencia laboral y Oficios suscritos por los Titulares del DIF y OPDAPAS, quienes medularmente señalan que la Ley Orgánica Municipal y la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales Para El Desarrollo Integral De La Familia", no contemplan que deban contar con una certificación.

Una vez analizada esta documentación, se determinó ponerla a disposición de **la parte** **Recurrente**, por acuerdo signado por la Comisionada Ponente el **once de marzo de dos mil veintitrés**; en este sentido, la ahora **parte Recurrente** fue omisa en remitir sus manifestaciones, por lo que se tiene por precluido su derecho para tal efecto.

**7. Ampliación del término para resolver**. El **once de marzo de dos mil veinticuatro**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra ju en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado**. Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO****.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

***“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”***, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**8. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, con fecha **quince de marzo de dos mil veinticuatro** la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos 8de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el **cuatro de mayo** **de dos mil veintitrés,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **cuatro de mayo** **de dos mil veintitrés,** esto es, al **mismo día hábil** siguiente al que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Sin que contraríe a lo anterior, el artículo 178 en análisis, refiere que el plazo de quince días hábiles se contará a partir del día siguiente de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de la resolución materia de impugnación, ya que ello debe entenderse para el efecto de que transcurrido dicho plazo ya no podrá presentarse el medio de impugnación o si es que se presenta, el mismo se considerará extemporáneo, no así cuando el medio de defensa se interponga antes de que comience a correr el plazo legal; tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª. /J.41/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 569 de la Décima época que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO****.*

*“Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

En el mismo tenor, el propio artículo 180 de la Ley de Transparencia local citado, en su último párrafo establece que cuando el recurso se interponga de manera electrónica, no será indispensable que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre de la parte **Recurrente**, por lo que, en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía SAIMEX, dicho requisito resulta innecesario.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción V del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*…*

***V. La entrega de información incompleta;”***

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la respuesta e informe justificado otorgados por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.”*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, previo al análisis de la respuesta es necesario precisar que quien se pronunció en el presente asunto es la Dirección de Administración en su carácter de servidor público habilitado competente, por lo que, de conformidad con el Manual General de Organización del Ayuntamiento de Valle de Bravo, dicha Dirección cuenta con las siguientes atribuciones:

*“DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN*

*OBJETIVO. Establecer las bases para dar respuesta inmediata a las necesidades actuales del Ayuntamiento de Valle de Bravo contribuyendo a la eficiencia en la operación de las dependencias que integran la administración del Ayuntamiento al* ***proveer a cada área de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, así como el personal requerido en cada área realizando las adquisiciones y contrataciones necesarias en estricto apego a la legalidad.***

*…*

*DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.*

*OBJETIVO.* ***Controlar, supervisar y coordinar la operación de los recursos humanos que dispone el Ayuntamiento…***

*FUNCIONES.*

*I. Movimientos de personal (Altas);*

*II. Padrón de anualidad y personal eventual (por contrato);*

*III. Revisión de correspondencia;*

*IV. Justificación de inasistencias;*

*V. Control de credencialización;*

*VI. Corrección de error en movimiento (ISSEMYM);*

*VII. Procedimiento de renuncia voluntaria;*

*VIII. Elaboración de finiquito por riesgo de trabajo;*

*IX. Constancia de no inhabilitación;*

*X. Constancia laboral;*

*XI. Elaboración de informes mensuales;*

*XII. Capacitaciones trimestrales a personal; y*

*XIII. Procedimiento de baja de personal.”*

De tal suerte que como se desprende de lo anteriormente citado, la **Dirección de Administración** es la unidad administrativa encargada de proveer a cada área de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, así como el personal requerido en cada área realizando las adquisiciones y contrataciones necesarias en estricto apego a la legalidad, por ende, se determina que la respuesta fue proporcionada por las Unidades Administrativas Competentes, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ya que turnó la solicitud al área en la que podría obrar la información de conformidad con la fracción XXXIX del artículo tercero de la legislación local vigente en materia de transparencia:

*XXXIX. Servidor público habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información.*

En este orden de ideas, se advierte que efectivamente la Unidad de Transparencia cumplió con lo expresado en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual menciona lo siguiente:

*“Artículo 162. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes* ***se turnen a todas las Áreas competentes*** *que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”*

Acotado lo anterior, debemos tener en cuenta que los requerimientos de información de **la parte Recurrente** versan en estricto sentido respecto de las certificaciones que exige la Ley Orgánica en sus artículos artículos 15, 32, 81 Bis, 85 Sexies, 92, 96, 96 Bis, 96 Quintus, 96 Septies, 96 Nonies, 96 Undecies, 96 Terdecies, 96 Quindecies, 113, 123 Bis, 124 Quater y 147 I, mismas que corresponden a los siguientes cargos:

*“Artículo 15.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.*

*Los integrantes de los ayuntamientos de elección popular deberán cumplir con los requisitos previstos por la ley, y no estar impedidos para el desempeño de sus cargos, de acuerdo con los artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y se elegirán conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con dominante mayoritario.*

*…*

*Artículo 32. Para ocupar las titularidades de la Secretaría, la Tesorería, la Dirección de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, de Turismo, de Ecología, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de las Mujeres, de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de las unidades administrativas y de los organismos auxiliares, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:*

*I. Ser persona ciudadana del Estado, en pleno uso de sus derechos;*

*II. No estar inhabilitada o inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;*

*III. Contar con título profesional o acreditar experiencia mínima de un año en la materia, ante la o el Presidente o el Ayuntamiento, cuando sea el caso, para el desempeño de los cargos que así lo requieran;*

*IV. Contar con certificación de competencia laboral en la materia del cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez oficial.*

*Este requisito deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones;*

*V. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género;*

*VI. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado, ni en otra entidad federativa, y*

*VII. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.*

*Vencido el plazo a que se refiere la fracción IV, la o el Presidente Municipal informará al Cabildo sobre el cumplimiento de dicha certificación laboral para que, en su caso, el Ayuntamiento tome las medidas correspondientes respecto de aquellos servidores públicos que no hubiesen cumplido.*

*…*

*Artículo 81 Bis.- Para ser* ***titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil*** *se requiere, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, tener los conocimientos suficientes debidamente acreditados en materia de protección civil para poder desempeñar el cargo y acreditar dentro de los seis meses siguientes a partir del momento en que ocupe el cargo, a través del certificado respectivo, haber tomado cursos de capacitación en la materia, impartidos por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México o por cualquier otra institución debidamente reconocida por la misma.*

*…*

*Artículo 85 Sexies.* ***El Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria****, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional, además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones,* ***el diplomado en materia de mejora regulatoria expedido por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México o la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto*** *Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México.*

*Artículo 92.- Para ser secretario del ayuntamiento se requiere, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, los siguientes:*

*I.*

*En municipios que tengan una población de hasta 150 mil habitantes, podrán tener título profesional de educación superior; en los municipios que tengan más de 150 mil o que sean cabecera distrital, tener título profesional de educación superior;*

*II.*

*III.*

*IV.*

*Derogada*

*Derogada*

*Contar con la certificación de competencia laboral en la materia, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones.*

*Artículo 96.- Para ser tesorero municipal se requiere, además de los requisitos del artículos 32 de esta Ley:*

*I. Tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, a juicio del Ayuntamiento; contar con título profesional en las áreas jurídicas, económicas o contables administrativas, con experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación, y con certificación de competencia laboral en funciones expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México;*

*El requisito de la certificación de competencia laboral, deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones.*

*(…)*

*Artículo 96. Bis.- El Director de Obras Públicas o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones:*

*(…)*

*Artículo 96 Ter.* ***El Director de Obras Públicas o Titular de la Unidad Administrativa equivalente****, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o alguna área afín, o contar con una experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación.*

***Además, deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México.***

***…***

***Artículo 96 Quintus. El Director de Desarrollo Económico o Titular de la***

***Unidad Administrativa equivalente, además de los requisitos del artículo*** *32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en el área económico-administrativa o contar con experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación.*

***Además, deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el***

***Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México.***

***…***

***Artículo 96 Septies. El Director de Desarrollo Urbano o el Titular de la*** *Unidad Administrativa equivalente, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en el área de ingeniería civil-arquitectura o afín, o contar con una experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación; además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de* ***validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México.***

***…***

***Artículo 96 Nonies.*** *El* ***Director de Ecología*** *o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en el área de biología-agronomía-administración pública o afín, o contar con una experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación; además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos aplicables al Estado de México.*

***Artículo 96. Undecies. El Director de Turismo, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en el área de turismo o afín.***

***Artículo 96 Terdecies. El Director de Desarrollo Social o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente,*** *además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en el área de Ciencias Sociales o a fin, o contar con una experiencia mínima de un año en la materia, con anterioridad a la fecha de su designación.*

***Artículo 96 Quindecies.- La persona titular de la Dirección de las Mujeres,*** *además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, deberá contar con título profesional en el área de las ciencias sociales o afines y conocimiento amplio del contexto en el municipio correspondiente.* ***Además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral en temas de prevención, atención integral y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en igualdad sustantiva o materias afines, expedida por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, el Instituto Hacendario del***

***Estado de México o alguna institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo.***

***Artículo 113.- Para ser contralor se requiere cumplir con los requisitos que se exigen para ser tesorero municipal, a excepción de la caución correspondiente.***

***Artículo 123 Bis.- La persona titular de los organismos públicos descentralizados en materia de cultura física y deporte,*** *a que se refiere el artículo anterior, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, preferentemente deberá contar con título profesional en el área de educación física o disciplina afín.*

***Artículo 124 Quater.- Para ser titular de la Unidad Municipal de Control y***

***Bienestar Animal,*** *se requiere, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, contar con Licenciatura y Cédula en Medicina Veterinaria, Zootecnista o profesión que se relacione con el conocimiento del cuidado y manejo de animales.*

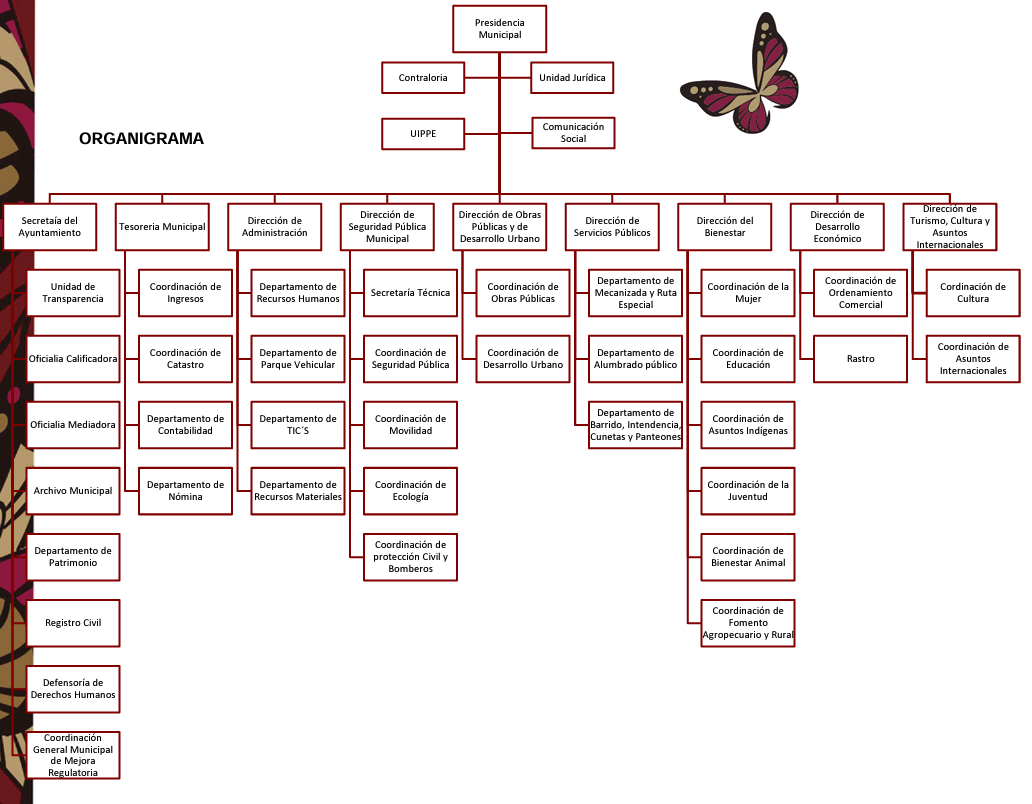
***Artículo 147 I.- La o el Defensor Municipal de Derechos Humanos debe reunir los requisitos siguientes:***

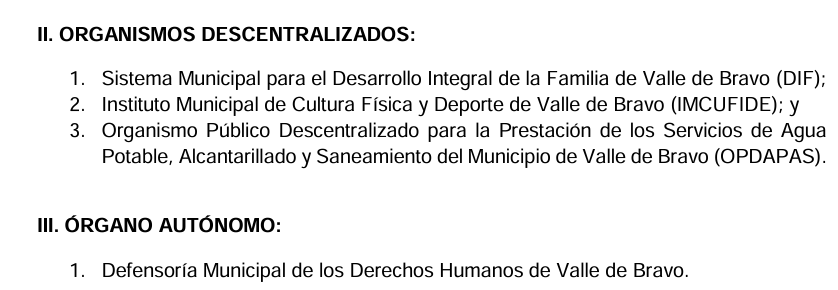
***…***

***VIII. Certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.”*** *(Énfasis añadido)*

Con lo anteriormente citado queda de manifiesto que si bien es cierto, la Ley Orgánica Municipal contempla de manera general en su artículo 32, la presentación de la certificación de competencia laboral, no menos cierto es que en los preceptos subsecuentes, se establece de manera específica los cargos que requieren contar con la certificación de competencia laboral dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones, por lo tanto, no podemos entender este artículo como una regla general aplicable.

En este sentido, una vez que se estableció la obligatoriedad de determinadas unidades administrativas para contar con las certificaciones de competencia laboral, para mejor proveer del presente análisis, se trae a colación la estructura orgánica, teniendo así que el Ayuntamiento de Valle de Bravo se compone de la siguiente manera:





Establecido lo anterior, es de vital importancia señalar que la denominación correcta de las áreas administrativas de las que **la parte Recurrente** requiere las certificaciones, son las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominación del área según la Ley Orgánica Municipal** | **Denominación del área conforme a la estructura orgánica del Sujeto Obligado** |
| Secretario del Ayuntamiento | Secretario del Ayuntamiento |
| Tesorero Municipal | Tesorera |
| Director de Obras Públicas o Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano |
| Director de Desarrollo Urbano o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente |
| Director de Desarrollo Económico o Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Directora de Desarrollo Económico |
| Director de Turismo | Director de Cultura, Turismo y Asuntos Internacionales |
| Director de Ecología o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Coordinación de Ecología |
| Director de Desarrollo Social o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Directora de Bienestar |
| Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria | Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria |
| Coordinación Municipal de Protección Civil | Coordinación de Protección Civil y Bomberos |
| Titular de los Organismos Públicos Descentralizados en materia de Cultura Física y Deporte | Director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo |
| Titular de la Dirección de las Mujeres | Coordinación de la Mujer |
| Contralor | Contraloría |
| Titular de la Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal | Coordinación de Bienestar Animal |
| Defensor Municipal de Derechos Humanos | Defensor Municipal de Derechos Humanos |

En esta tesitura, se procede al análisis de la respuesta e informe justificado proporcionados por el **Sujeto Obligado**, para determinar si se colma el requerimiento de información de **la parte Recurrente**, para ello es necesario traer a colación el siguiente cuadro para un mejor entendimiento:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artículo** | **Denominación del área conforme a la estructura orgánica del Sujeto Obligado** | **¿Se encuentra obligado por la Ley Orgánica Municipal a presentar la certificación de competencia laboral?** | **¿Entregó certificación?** | **¿El pronunciamiento satisface el requerimiento de información?** |
| **81 Bis** | **Coordinación de Protección Civil y Bomberos** | **Sí,** debe presentar certificado o cursos de capacitación en la materia, impartidos por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México. | **Sí**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado:** Adjuntó la certificación de competencia laboral en versión pública. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, asimismo del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **85 Sexies** | **Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria** | **Sí**, debe acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones el diplomado en materia de mejora regulatoria expedido por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México o la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. | **Sí**  **Respuesta e Informe Justificado:** Se presentó un diploma expedido por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública. |
| **92** | **Secretario del Ayuntamiento** | **Sí**, debe contar con la certificación de competencia laboral en la materia, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | **Sí**  **Respuesta e Informe Justificado:** Proporciona una certificación de competencia laboral | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública. |
| **96** | **Tesorera Municipal** | **Sí,** debe contar con la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones. | **Sí**  **Respuesta e Informe Justificado:** Proporciona una certificación de competencia laboral. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, asimismo del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **96 Bis, Ter y 96 Septies** | **Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** | **Sí**, deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | **Sí**  **Respuesta:** Refiere que la Dirección de Obras Públicas se encuentra fusionada con la Dirección de Desarrollo Urbano y remite la certificación de competencia laboral en versión pública.  **Informe Justificado:** Remitió la certificación de competencia laboral adjuntada en respuesta, sin embargo, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf***“,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, asimismo del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **96 Quintus** | **Directora de Desarrollo Económico** | **Sí,** deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | **No**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado:** La Directora de Desarrollo Económico señaló que inició sus funciones el 19 de abril de 2023, por lo tanto, aún no se cuenta con tal documentación. | **Sí**  **Puntualizaciones:** En informe justificado, la Directora de Desarrollo Económico señaló que inició sus funciones el 19 de abril de 2023, por lo tanto, a la fecha de la solicitud, es decir, al 21 de abril de 2023, se encuentra en tiempo para tramitar dicha certificación. |
| **96 Nonies** | **Coordinación de Ecología** | **Sí,** deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | **No**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado: E**l actual Coordinador de Ecología,señaló queel 28 de abril de 2023 fue nombrado Coordinador de Ecología y se encuentra realizando los trámites para su certificación.  Asimismo adjuntó la certificación de competencia laboral de la Ing. Emilia Gómez Solórzano, quien fungía a la fecha de la solicitud como Coordinadora de Ecología.  No obstante lo anterior, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf***“,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. | **No**  **Observaciones:** Si bien es cierto proporcionó la certificación de quien fungía a la fecha de la solicitud como la Coordinadora de Ecología, no menos cierto es que no se pudo poner a disposición del particular por obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf“***, no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial.  Asimismo, se testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, aunado al hecho de que del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **96 Undecies** | **Director de Cultura, Turismo y Asuntos Internacionales** | **No**, en el artículo no se establece la obligación de presentar la certificación de competencia laboral. | **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado:** El Director de Cultura, Turismo y Asuntos Internacionales señaló que se encuentra en reevaluación y su examen final se programó para el 24 de mayo de 2023. | **Sí**  **Puntualizaciones:** De conformidad al artículo 96 Undecies no se encuentra obligado a contar con dicha certificación, por lo tanto, no es dable ordenar su entrega. |
| **96 Terdecies** | **Directora de Bienestar** | **No,** en el artículo no se establece la obligación de presentar la certificación de competencia laboral. | **Sí**  **Respuesta e Informe Justificado:** Proporciona una certificación de competencia laboral. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, asimismo del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **96 Quindecies** | **Coordinación de la Mujer** | **Sí,** deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral en temas de prevención, atención integral y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en igualdad sustantiva o materias afines, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | **Sí**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado:** La Coordinadora de la Mujer adjuntó la certificación de competencia laboral en el estándar laboral IAPEM “Igualdad Sustantiva, No discriminación, participación de las mujeres, prevención, atención integral, erradicación de la violencia contra las mujeres en sus distintas etapas de la vida, nuevas masculinidades y trabajos de cuidados”  No obstante lo anterior, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf***“,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. | **No**  **Observaciones:** Si bien es cierto proporcionó la certificación de competencia laboral en informe justificado, no menos cierto es que no se pudo poner a disposición del particular por obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf“***, no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. |
| **113** | **Contralor** | **Sí,** debe presentar certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones. | **Sí**  **Respuesta e Informe Justificado:** Proporciona una certificación de competencia laboral. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Se testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, asimismo del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **123 Bis** | **Director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo** | **No,** en el artículo no se establece la obligación de presentar la certificación de competencia laboral. | **Sí**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado: El** Director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo adjuntó la certificación de competencia laboral en atención al público.  No obstante lo anterior, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf***“,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. | **Parcialmente**  **Observaciones:** Si bien es cierto no se encuentra obligado a contar con dicha certificación, no menos cierto es que la proporcionó en informe justificado, sin embargo, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf“***,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial.  Además testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código QR, del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **124 Quater** | **Coordinación de Bienestar Animal** | **No,** en el artículo no se establece la obligación de presentar la certificación de competencia laboral. | **Sí**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado:** La Coordinadora de Bienestar Animal,adjuntó la certificación de competencia laboral en atención al público.  No obstante lo anterior, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf***“,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. | **No**  **Observaciones:** Si bien es cierto no se encuentra obligada a contar con dicha certificación, no menos cierto es que la proporcionó en informe justificado, sin embargo, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf“***,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial.  Además testó la fotografía cuando esta se considera pública, respecto al CURP y código QR, del análisis al acuerdo, este carece de fundamentación y motivación. |
| **147 I** | **Defensor Municipal de Derechos Humanos** | Sí, se debe presentar certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. | **Sí**  **Respuesta:** Fue omiso en pronunciarse en este punto.  **Informe Justificado:** La Defensora Municipal de Derechos Humanos,adjuntó la certificación en materia de derechos humanos expedida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  No obstante lo anterior, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf***“,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. | **No**  **Observaciones:** Si bien es cierto, remitió su certificación en materia de derechos humanos, al obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf“***,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea número oficial. |

De lo esquematizado con antelación, es dable concluir que el **Sujeto Obligado** atendió parcialmente el requerimiento de información, ya que como señaló **la parte Recurrente** en su recurso de revisión, **la información se encuentra incompleta,** ello en virtud de que en respuesta **únicamente proporcionó** las certificaciones de la Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Directora de Bienestar y la Contralora Municipal, mientras que en informe justificado **además de las ya referidas, proporcionó** las certificaciones del Titular de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Coordinación de Ecología, Coordinación de la Mujer, Director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo, Coordinadora de Bienestar Animal y Defensor Municipal de Derechos Humanos, sin embargo, por cuanto hace a las certificaciones de los Titulares de la Coordinación de Ecología, Coordinación de la Mujer, Director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo, Coordinadora de Bienestar Animal y Defensor Municipal de Derechos Humanos, estas no se pudieron poner a la vista de **la parte Recurrente** por obrar en el archivo ***“82-areasT.pdf“***,no se puso a la vista del particular por contener un número telefónico del que no se tiene certeza que sea un número telefónico oficial.

En esta consecución de ideas, es necesario señalar quede lo entregado, se advierte que el **Sujeto Obligado**, adjuntó dichos documentos en versión pública, en los que se testaron datos referentes al CUPR, código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral, datos que se analizan para tener certeza, de que los mismos se entregaron de una manera correcta:

Así, se procede analizar si dichos datos son confidenciales o públicos; en principio, cabe mencionar que el artículo 6°, Apartado A), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Igualmente, el segundo párrafo del artículo 16 de dicho ordenamiento, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; así como, a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Acorde con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.

Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

En concordancia con lo previo, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmitan entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

A.Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídica colectiva y que esta sea identificada o identificable.

B.Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.

Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales. En ese orden de ideas, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).

En este sentido, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física o jurídica colectiva identificada e identificable. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.

Por lo cual, la confidencialidad de los datos personales, tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre el particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales versus el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público.

En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso de los salarios de todos los servidores públicos, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales, cumplimiento de atribuciones, entre otros; información que necesariamente está vinculada con datos personales, que pierden la protección en beneficio del interés público (no por eso dejan de ser datos personales, sólo que no están protegidos en la confidencialidad).

Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones públicas, la regla es clara, ya que los datos personales que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.

Ahora bien, cuando las personas tienen una relación comercial, laboral, de servicios, trámites o del tipo que sea, necesariamente por un tema de interés público, debe cederse un poco de privacidad, de tal forma que la gente en general pueda verificar el debido desempeño de los servidores públicos, la aplicación de la ley y el ejercicio de recursos públicos; sin embargo, esto obliga a un ejercicio de ponderación en donde únicamente se privilegie la publicidad de los datos esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, sin afectar la vida privada de las personas.

Bajo ese contexto, se analizarán si los datos previamente mencionados, deben ser considerados confidenciales, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, o públicos.

* **Clave Única de Registro de Población.**

El artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos; además, el diverso 85 de la Ley General de Población, prevé que corresponde a la Secretaría de Gobernación el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Acorde con lo anterior, el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, establece en su fracción III, que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal tiene la atribución de asignar y depurar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas residentes en el país, así como a los mexicanos que residan en el extranjero.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Gobernación en las direcciones <https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/html/informacionecurpPS.html> y <https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp-142226> (consultadas el ocho de agosto de dos mil veintitrés), estableció que la Clave Única del Registro de Población, es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero y se compone de dieciocho elementos, representados por letras y números, que **se generan a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad** **del interesado** (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) de la siguiente forma:

* El primero y segundo apellidos, así como al nombre de pila;
* La fecha de nacimiento;
* El sexo, y
* La entidad federativa de nacimiento.

Los dos últimos elementos de la Clave Única de Registro de Población evitan la duplicidad de la Clave y garantizan su correcta integración; por lo que, se desprende que la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí sola brinda información personal de su titular y lo hace identificado e identificable, motivo por el cual se aprueba su eliminación de las versiones públicas, ya que además no guarda relación con el desempeño laboral de un individuo, simplemente se trata de un trámite administrativo requerido por la autoridad federal para hacer identificables a las personas.

Situación que se robustece, con el Criterio 18/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de la Clave Única de Registro de Población, por tratarse de un dato personal confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral.**

Al respecto, este dato sirve para validar que la persona señalada en el Certificado fue efectivamente la aprobada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, pues da acceso al nombre completo de la persona certificada, el nombre del Estándar de Competencia Laboral y la clave de la entidad certificadora, que acreditó.

Conforme a lo anterior y toda vez que el Código bidimensional en análisis no da acceso a datos personales, sino al contrario a información de naturaleza pública, aunado a que sirve para verificar la autenticidad del Certificado, al poder corroborar que la información contenida en el certificado, corresponde a la persona acreditada; por lo que, no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Fotografía.**

Por lo que hace a las **fotografías**, es preciso señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.

Así, se considera que dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, razón por la cual es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.

Además cuando se brinda servicios a la ciudadanía, es de relevancia conocer e identificar a todos sus trabajadores, no importa el nivel o rango (con excepción del personal operativo en materia de seguridad, respecto del cual el Pleno de este Instituto ya se ha pronunciado en el sentido de que la información que los haga identificados o identificables debe clasificarse como reservada).

En este sentido, resultan aplicables por analogía, los Criterios de interpretación con clave de control SO/015/2017 y SO/001/2013 emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, en los cuales se esgrimen argumentos, que, si bien no se refieren de manera específica a fotografías de servidores públicos, sí establecen un criterio para que este dato personal pueda ser considerado como público, cuando se pretende acreditar que una persona es servidor público.

Lo anterior es así, pues debe tenerse presente que el actuar de los servidores públicos incide de manera específica en los derechos de los particulares, toda vez que el acto de un servidor público en ejercicio de sus funciones, de manera directa genera derechos y obligaciones al considerarse un acto administrativo o acto de autoridad, siendo primordial que estos trabajadores se identifiquen ante la ciudadanía, por lo que otorgar acceso a los documentos que obran en los archivos de los Sujetos Obligados y que además están directamente relacionados con el cumplimiento de disposiciones normativas o el ejercicio de funciones, reviste un interés público.

En razón de lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que los acredita como servidores públicos, deben ser consideradas un dato personal que no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.

Conforme a lo anterior, resulta necesario señalar que el Pleno de este Instituto emitió el Criterio de interpretación 03/19 cuyo rubro dispone lo siguiente: **“Servidores públicos con categoría de mando medio y superior. La fotografía de aquellos es de carácter público”**; no obstante, dicho criterio fue interrumpido en términos del artículo 9, fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, por lo tanto, las fotografías de servidores públicos, sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que se relaciona con la imagen de una persona que ejerce actos de autoridad.

En este sentido, se tiene que la clasificación de los datos previamente analizados realizada por el **Sujeto Obligado** es parcialmente correcta, pues la Clave Única de Registro de Población si es susceptible de clasificación, sin embargo los datos como fotografía y código bidimensional QR de Certificado de Competencia Laboral si son susceptibles de dejarse visibles.

Aunado a que si bien en respuesta, el sujeto obligado remitió acuerdo con el que pretendía dar sustento a la versión pública, dicho acuerdo corresponde a una solicitud de información diversa y el remitido en informe justificado carece de la debida fundamentación y motivación en virtud de que no se señaló puntualmente la justificación para considerar los datos a clasificar como confidenciales, por lo tanto, es necesario hacer del conocimiento de las partes que para los casos en los que se presenten versiones públicas, estas deberán acompañarse con el acuerdo del Comité de Transparencia en donde se apruebe la versión pública del historial académico alusivo, ya que en caso contrario se considera que es un documento ilegible e incompleto, esto en razón de que los artículos 12[[1]](#footnote-1) y 23 fracción, IV[[2]](#footnote-2) de la Ley de la Materia, establecen que los Sujetos Obligados tiene la obligación de transparentar y permitir el acceso a toda la información pública que generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven; así como proteger los datos personales que obren en su poder.

Aunque, existen excepciones al derecho de acceso a la información conforme a lo establecido en los artículos 3, fracciones XX, XXI, XXXIV y XLV, 91, 122, 135, 143, 147, 148 y 149 de la repetitiva Ley de Transparencia, los cuales establecen lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:…*

***XX.*** *Información clasificada: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.*** *Información confidencial: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

*…*

***XXXIV****. Prueba de interés público: Es el proceso de ponderación entre el beneficio que reporta dar a conocer la información confidencial solicitada contra el daño que su divulgación genera en los derechos de las personas, llevado a cabo por el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias*

*…*

***XLV.*** *Versión pública: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 122.*** *La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y, en ningún caso, podrán contravenirla.*

*Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables*

***Artículo 135.*** *Los lineamientos generales que se emitan al respecto en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;***

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.*

***Artículo 147. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.***

***Artículo 148.*** *No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:*

***I.*** *La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;*

***II.*** *Por Ley tenga el carácter de pública;*

***III****. Exista una orden judicial;*

***IV.*** *Por razones de seguridad pública, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o*

***V.*** *Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción I del presente artículo, deberá sujetarse a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.*

***Artículo 149.*** *El acuerdo que clasifique la información como confidencial deberá contener un razonamiento lógico en el que demuestre que la información se encuentra en alguna o algunas de las hipótesis previstas en la presente Ley.” (Énfasis añadido)*

De los artículos transcritos anteriormente, se observan las excepciones que tiene el derecho de acceso a la información pública, respecto a algunos tipos de información, lo cual restringe su acceso, precisándose de manera clara las hipótesis que dan lugar a clasificar la información, la cual puede ser de dos maneras: Reservada o Confidencial.

Reviste interés para el caso particular, la clasificación de la información como confidencial, la cual se actualizará cuando por su naturaleza, contenga datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y la que presenten los particulares a los Sujetos Obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

De igual forma, para el caso de la información confidencial se aprecia, que se establece un procedimiento para clasificar la información como confidencial, mediante el cual se fundamentará y motivará la necesidad de clasificar la información, en el que se precisen los motivos que obliguen a la clasificación; lo que se consolida con lo señalado por el artículo 168 de la Ley en la Materia, que señala:

*“****Artículo 168****. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:*

***I.*** *El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que* ***funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia****, mismo que deberá resolver para:*

*a****) Confirmar la clasificación;***

*b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.*

***II.*** *El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y*

***III.*** *La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece esta Ley.*

Hechas estas precisiones, se advierte que el **Sujeto Obligado** no cumplió con lo señalado en lo procedente, al omitir acompañar el acuerdo de su Comité de Transparencia que funde y motive del por qué testó diversa información dentro de las certificaciones de competencia laboral, creando con ello una incertidumbre jurídica, por no sustentar la versión pública de los datos señalados, contraviniendo lo establecido por el artículo 9, fracción I[[3]](#footnote-3), VI, VIII y 11 párrafo primero[[4]](#footnote-4) de la ley de la Materia.

Adicionalmente, no se advierte que el **Sujeto Obligado** hubiese expresado el artículo, fracción, inciso o subinciso de la legislación aplicable a la materia, que establece de manera expresa la naturaleza jurídica de todos y cada uno de los datos testados en las certificaciones de competencia laboral remitidas, lo anterior, con la finalidad de justificar la procedencia de omitirlos o testarlos, en consecuencia, el actuar del Sujeto Obligado carece de fundamentación y motivación, consistentes en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.*** *La* ***debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento****.*

***…”***

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación* ***y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa****. Por tanto,* ***no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa****, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente****, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción****.” Énfasis añadido.*

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que en el acto de autoridad, además de contener los supuestos jurídicos aplicables debe explicar claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada podrá impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, circunstancia que en el presente asunto no sucedió.

Aunado a ello no se debe perder de vista que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, los cuales deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia, al respecto, conviene referir que la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México establece:

***Artículo 131.******La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación*** *previstos en esta Ley* ***corresponderá a los sujetos obligados; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información****, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.*

***Artículo 132.******La clasificación de la información se llevará a cabo*** *en el momento en que:*

***I.******Se reciba una solicitud de acceso a la información****;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*Tratándose de información reservada, los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud, para verificar si subsisten las causas que le dieron origen.*

***Artículo 134.******Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general*** *ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

***En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información****.*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.*

***Artículo 135.*** *Los lineamientos generales que se emitan al respecto en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

*(Énfasis añadido)*

De la normatividad se aprecia que l**a** carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación corresponde a los sujetos obligados; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información, la cual se llevará a cabo en el momento en que *se reciba una solicitud de acceso a la información;* *determine mediante resolución de autoridad competente; o* *generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia,* cabe mencionar que los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general, en donde no se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información, es decir, la clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, formalidades que en el presente asunto no fueron observadas por el **Sujeto Obligado**.

En conclusión, se tiene que el actuar del **Sujeto Obligado** fue incorrecto pues como se señaló anteriormente, el testado en las certificaciones resultó excesivo al no dejar visibles la fotografía y el código bidimensional QR de la certificación, sin embargo para el dato que si resulta procedente su clasificación, que es la Clave Única de Registro de Población (CURP), no se colocó la debida fundamentación y motivación en el acuerdo que da sustento a las versiones públicas.

Bajo este orden de ideas es que este Instituto considera que la respuesta del **Sujeto Obligado** en el recurso de revisión que ahora se resuelve no colma a cabalidad el requerimientos de información de **la parte Recurrente**, por lo que derivado de un análisis exhaustivo realizado es que se determina **MODIFICAR** la respuesta del recurso de revisión **02459/INFOEM/IP/RR/2023**, para ordenar la entrega de las certificaciones de competencia laboral de los titulares de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Coordinación de Ecología, Dirección del Bienestar, Coordinación de la Mujer, Contralora, Dirección del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo, Coordinación de Bienestar Animal y Defensoría Municipal de Derechos Humanos, remitidas en respuesta e informe justificado, en versión pública correcta, acompañada del acuerdo del comité de transparencia.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **la parte Recurrente** en el recurso de revisión **02459/INFOEM/IP/RR/2023**; por lo que, en términos del **Considerando** **Cuarto** de esta resolución, se **MODIFICA** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado** haga entrega, de ser el caso en **versión pública correcta** a **la parte Recurrente,** vía **SAIMEX,** en términos del **Considerando** **Cuarto de la presente resolución, lo siguiente:**

* ***Las certificaciones de competencia laboral de los titulares de las siguientes áreas*** ***remitidas en respuesta e informe justificado:***

1. ***Coordinación de Protección Civil y Bomberos***
2. ***Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria***
3. ***Secretario del Ayuntamiento***
4. ***Tesorería Municipal***
5. ***Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano***
6. ***Coordinación de Ecología***
7. ***Dirección del Bienestar***
8. ***Coordinación de la Mujer***
9. ***Contraloría Municipal***
10. ***Dirección del Instituto de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo***
11. ***Coordinación de Bienestar Animal***
12. ***Defensoría Municipal de Derechos Humanos***

*Deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición de* ***la parte******Recurrente****.*

**Tercero. Notifíquese vía SAIMEX,** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Cuarto.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Quinto. Notifíquese vía SAIMEX,** a **la parte Recurrente** la presente resolución, así como que podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EMITIENDO VOTO PARTICULAR; EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

   Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder…

   IV. Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal;…”(Sic) [↑](#footnote-ref-2)
3. “Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

   I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiable…

   VI. Legalidad: Obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables…

   VIII. Objetividad: Obligación del Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales…” (Sic) [↑](#footnote-ref-3)
4. “Artículo 11. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, **congruente**, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona…”(Sic) [↑](#footnote-ref-4)